

Obreros argentinos: cortar las rutas para abrir el futuro

*José Miguel Candia**

Resumen

Es posible afirmar que los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 abrieron un nuevo ciclo en la historia de las luchas populares argentinas; no obstante, para comprender plenamente lo ocurrido en esas jornadas es necesario analizar el surgimiento y consolidación de un fenómeno novedoso y cargado de potencialidades y riesgos: las organizaciones de trabajadores desocupados, identificadas por la opinión pública como el movimiento piquetero. Un primer apunte de alto valor sociológico es la identificación del espacio geográfico y económico en el que se gestó la protesta piquetera. Al respecto, se consigna en este artículo que las organizaciones de desempleados no surgieron en regiones de extrema pobreza; por el contrario, la protesta se inició en municipios y provincias donde el tejido social y los mecanismos de articulación de la vida comunitaria se vieron profundamente sacudidos por la súbita pérdida de importantes fuentes de trabajo. Son muchos los frentes de lucha en los cuales el movimiento piquetero debe desplegar sus propuestas. El autor identifica tres espacios principales: los programas y demandas económicas; las formas organizativas, y la generación de nuevos paradigmas y referentes simbólicos.

Abstract

It is likely that the events of December 19 and 20, 2001 might have opened a new cycle of popular struggles in Argentina. However, to comprehend fully what happened here, it's necessary to analyze the emergence and consolidation of a new trend: the unemployed workers organizations or broadly known as picketing movements. An important sociological asset is the identification of the geographical and economic space in which the picketing groups have developed. In this context, we feel that unemployment workers organizations didn't evolve in region of extreme poverty; on the contrary, they have initiated in municipalities and provinces where the social fabric and the mechanism of community were profoundly affected by a sudden loss of jobs. There are many places where the picketing movement needs to deploy its struggling course. The author identifies three main spaces: the proposals and economic demands; the forms of organization, and the creation of new paradigms, and the symbolic references.

* Sociólogo y latinoamericanista, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Consultor de la Dirección General de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México.

Diciembre de 2001: protesta popular y nuevos emergentes sociales

"¡Que se vayan todos!" Hay que admitir que esta consigna —que se repitió de manera atronadora los días 19 y 20 de diciembre— tiene el contenido impugnador y la vocación maximalista de las propuestas más duras de los años setentas. Pero ni el país, que parecía caerse a pedazos, ni quienes salieron a la calle a protestar ante el agobio de una situación económica extrema, guardan similitud con las homogéneas columnas obreras que protagonizaron la huelga general conocida como el "rodrigazo" en junio de 1975 y que hizo tambalear al gobierno de Isabel Martínez (1974-1976).

Probablemente nunca, desde la instauración de la democracia en 1983, haya habido en Argentina una oposición tan generalizada y virulenta como la que explotó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, y en los actos públicos que se sucedieron después de haber conocido la caída del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y el paso apresurado de cuatro mandatarios en menos de un mes. Puede cuestionarse el carácter tan generalizado de una consigna que encierra, en un solo grito, el rechazo a funcionarios corruptos, banqueros ladrones, especuladores inescrupulosos, y que interpela, de manera frontal, a una dirigencia de políticos inoperantes. Sin embargo, nadie podrá negar que el grito de "que se vayan todos" expresó, con lapidaria exactitud, el hartazgo y desilusión que el movimiento de los trabajadores desocupados (piqueteros) y las asambleas barriales sienten hacia las agrupaciones políticas convencionales y hacia una franja significativa de la clase dirigente argentina (Bonasso, 2002; Barbeta y Bidaseca, 2004).

El carácter plural de un movimiento social en el que confluyen trabajadores desocupados, organizaciones de jubilados, pobladores de barrios marginales y ahorristas injustamente despojados de su patrimonio, constituye el aspecto más relevante de un fenómeno colectivo que posibilitó la concurrencia de núcleos sociales que hasta hace pocos años parecían vivir en universos diferentes. Mientras amplios segmentos de la clase media habían descubierto las ventajas de consolidar sus ingresos aprovechando un dólar barato, enormes sectores de la clase trabajadora sufrían en carne propia los efectos más graves del cierre de empresas, la pérdida de importantes beneficios sociales y el paso traumático al submundo del desempleo. Tres años consecutivos de recesión y la debacle del modelo de convertibilidad, que igualó el valor del peso con el dólar, terminaron con la ficción de una economía cuya estabilidad dependía, en buena medida, de un respirador artificial como fue el endeudamiento externo.

La crisis que empezó a incubarse en 1998, bajo el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cuando ya era un dato casi obvio que la paridad del "uno por uno" (un peso, un dólar) resultaba insostenible, fue acompañada por un vasto proceso subterráneo de descreimiento político, de repudio a las instituciones públicas y a los antiguos liderazgos sociales. Esta articulación de deterioro económico, hartazgo social y escepticismo político explica la si-

tuación de crisis orgánica que vive la Argentina y cuyas expresiones más visibles son los cortes de carreteras (piquetes) que promueven los trabajadores desempleados y el golpeteo multitudinario de cacerolas (cacerolismo) que protagonizan las asambleas barriales. En esencia, se trata de un momento de ruptura entre la ciudadanía y sus formas convencionales de representación social (partidos políticos, sindicatos burocratizados, representantes parlamentarios) y del conjunto de la sociedad con ciertas instituciones públicas de fuerte presencia en la vida del país, desde el poder judicial a la policía, de las instancias provinciales y municipales de gobierno al Ejecutivo nacional. Sobre este aspecto de la crisis —el punto de quiebre en la relación entre Estado y sociedad civil— debe efectuarse una reflexión más detenida para explicar el colapso de una estrategia económica y el agotamiento de ciertas formas de agrupamiento y expresión social (Godio, 2002).

El deterioro de las instituciones públicas y el desprestigio que alcanzó tanto la vida interna como la acción de los partidos, reflejan una crisis de representación que muestra las insuficiencias de lo que suele definirse como "democracia formal". En este sentido, se percibe en la opinión pública argentina una disminución de la valoración positiva sobre el régimen democrático con respecto a lo que un ciudadano medio pensaba a principios de los años ochentas. Con el crecimiento de la pobreza, el desempleo, la inestabilidad laboral y la corrupción gubernamental, las preferencias populares se han ido volcando hacia los valores políticos que se vinculan con la honestidad y la eficacia en el ejercicio de la función pública, dentro de un ambiente de escepticismo hacia las prácticas políticas tradicionales. El triunfo de Luis Zamora, candidato a diputado por el trotskista Partido Obrero, en la ciudad de Buenos Aires, y el significativo caudal que alcanzó el "voto bronca" (votos nulos o en blanco) en la jornada electoral del 14 de octubre de 2001, constituyen algunas de las expresiones más transparentes del estado de ánimo que domina a la sociedad argentina. Causas similares explican la súbita popularidad de la agrupación Alianza para una República de Iguales (ARI) que encabeza la ex-diputada Elisa Carrió, la Alianza Izquierda Unida y el Polo Social que lidera el sacerdote Luis Farinello. El triunfo del candidato del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, con el 22 por ciento de los votos, en las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003, constituye apenas un intento de restablecer los vínculos de representación social entre las organizaciones políticas convencionales —los partidos políticos— y la sociedad civil, a partir de una renovación parcial de las instituciones que le dan sustento a la democracia representativa (el Poder Judicial y el Poder Legislativo; las instancias provinciales y municipales de gestión y resolución de los asuntos públicos).

Las dificultades del movimiento social para encontrar expresiones políticas que canalicen sus demandas volvió a presentarse en las elecciones legislativas del 23 de octubre del año 2005. En esta coyuntura cayó el voto de la izquierda, salvo algunas excepciones como la de la ARI, y también dismi-

nuyó el caudal de votos anulados o en blanco. Los dirigentes piqueteros que accedieron a cargos de elección popular —27 en total— lo hicieron desde las listas del "Frente para la Victoria", la coalición que apoyó al presidente Kirchner, cuyos integrantes pertenecen a organizaciones de desocupados cercanas al gobierno como Barrios de Pie, Movimiento "Evita", Federación Tierra y Vivienda o el Frente Nacional Transversal y Popular que encabeza el ahora diputado Edgardo Depetri (Piqué, 2005).

El origen, funcionamiento y arraigo de las diversas organizaciones sociales que se adueñaron de la calle a partir del derrumbe del gobierno del presidente De la Rúa muestran una variedad de prácticas que responden al origen de sus protagonistas (obreros desocupados, habitantes de zonas en extrema pobreza, trabajadores precarios, jubilados, ahorradores atrapados en el cerco financiero) y al tipo de luchas que han desarrollado desde su constitución. Los trabajadores desocupados y el movimiento de los jubilados registran valiosos antecedentes de protesta callejera como los piquetes que bloquean rutas y puentes y la demanda colectiva de alimentos frente a los supermercados. En otros sectores, la experiencia es más reciente y se vincula a requerimientos que ocupan un lugar relevante en el interés ciudadano: desde el momento en que se estableció el límite para los retiros bancarios, se hizo público el manejo corrupto de algunos jueces de la Corte Suprema, y el entonces ministro de economía Domingo Cavallo dispuso la reducción del monto de sueldos de los burócratas y de las jubilaciones (Almeyra, 2004).

Es oportuno preguntarse entonces si las asambleas barriales y el movimiento piquetero son un factor que potencia la pérdida de identidades sociales y acelera la disolución institucional o, por el contrario, son la usina que vigoriza al movimiento popular y fortalece el reclamo de los grupos más postergados de la sociedad. Cabe una primera advertencia: es necesario comprender que en las actuales condiciones resulta casi lógico que los objetivos del movimiento popular sean un tanto imprecisos y predomine cierto caos organizativo. La consigna "que se vayan todos", que surgió al calor de los enfrentamientos callejeros de diciembre de 2001, expresa un sentir colectivo y la percepción que los manifestantes tienen de los funcionarios, jueces y políticos, pero también encierra un criterio de generalización que, por riesgoso, fue difícil sostener más allá del pico de protesta social que arrancó en diciembre de 2001 y se mantuvo durante el verano del año 2002. La disminución del "voto bronca" en las elecciones presidenciales de abril de 2003 fue un duro traspie para los grupos piqueteros que sostuvieron a raja tabla la propuesta de "que se vayan todos" y aconsejaron anular el voto o votar en blanco (Fernández Mores, 2003).

De cualquier manera y pese a todas las limitaciones que puedan señalarse, no hay duda que la emergencia social abre nuevos caminos y construye experiencias que permiten explorar formas asociativas originales. La búsqueda solidaria de vínculos que posibiliten atender necesidades básicas insatisfechas y la recuperación de empresas abandonadas por sus propieta-

rios parece estar más cerca de las asambleas vecinales y del movimiento piquetero que de las viejas estructuras partidarias. Habrá que comprender que no se logrará la vigencia de una democracia plena —cuyos dispositivos formales están vigentes desde 1983— si se desdibujan los límites entre el Estado y la sociedad civil y, sobre todo, si no existe una sociedad civil auto organizada, pluralista e incluyente. Con estos elementos puede iniciarse la construcción de un movimiento popular autónomo que le dé aliento y furia a otra de las consignas que hicieron suya los agraviados y cuyo tono es más propositivo: "Piquete y cacerola la lucha es una sola".

Los nuevos emergentes sociales: el movimiento de los trabajadores desocupados

Si bien los acontecimientos de diciembre de 2001 abrieron un nuevo ciclo en la historia de las luchas populares argentinas, para comprender plenamente lo ocurrido es necesario analizar el surgimiento y consolidación de un fenómeno novedoso y cargado de potencialidades y riesgos: se trata de las organizaciones de trabajadores desocupados, más conocidas como el movimiento piquetero.

Un primer apunte de alto valor sociológico es la identificación del espacio geográfico y económico en el que se gestó la protesta piquetera. Al respecto, es importante consignar que el surgimiento de las organizaciones de desempleados no se produjo en regiones marginales o de extrema pobreza: por el contrario, se inició en municipios y provincias donde el tejido social y los mecanismos de articulación de la vida comunitaria se vieron profundamente sacudidos por la súbita pérdida de importantes fuentes de trabajo. De esta manera, la matriz social sobre la cual se gestó el movimiento piquetero —el piquete es la acción colectiva de bloquear carreteras y puentes— fueron las ciudades de Cutral-Co y Plaza Huincul en la provincia sureña de Neuquén y en las localidades de General Mosconi y Tartagal en la provincia de Salta, en el norte argentino. En los cuatro puntos geográficos mencionados, la vida social se había estructurado a partir de las actividades que desarrollaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la mayor empresa productiva del Estado argentino. Esto explica que los promotores del movimiento piquetero fueran los ex-trabajadores de la más importante empresa pública de esos años y constituyeran el sector de la clase obrera con más altos ingresos, además de ser portadores de una extensa carrera laboral que incluía familias y generaciones completas, las cuales habían construido sus referentes culturales y su patrimonio económico en el marco de la estabilidad laboral y la protección de los sistemas de seguridad social.

Para situar de manera más precisa el contexto económico-social en el cual surge el movimiento piquetero es necesario identificar las grandes líneas de política económica que adoptó el gobierno del presidente Menem.

El régimen menemista estableció tres ejes rectores de su programa económico: la eliminación del abultado déficit fiscal que heredó de la administración de Raúl Alfonsín (1983-1989); la desregulación de los mercados, incluido el mercado de trabajo, y la acelerada privatización o disolución de las empresas públicas y organismos gubernamentales considerados "no prioritarios". En este último rubro debe destacarse la venta de YPF, en 1992, al capital privado. En el año de 1991 el ministro de economía Domingo Cavallo puso en marcha el Plan de Convertibilidad que detonó una verdadera transformación de las reglas que normaban las actividades económicas, entre otras: se eliminó la flotación del peso y se fijó una paridad "uno por uno" del peso con el dólar; se redujeron drásticamente las barreras arancelarias y aduaneras; se liberalizó el comercio exterior, y se incrementó la presión tributaria. De manera brusca, se suprimieron los principales mecanismos públicos destinados a regular la economía, con el fin de propiciar la libre movilidad de los factores productivos y lograr la plena vigencia de las leyes del mercado, además de fomentar, de modo indiscriminado, el ingreso de capitales extranjeros. El rediseño de las instituciones gubernamentales incluyó un programa de reestructuración general del Estado que se acompañó de una pronunciada reducción del gasto público. También se promovió la descentralización administrativa y el traslado de competencias de la instancia nacional a las provincias y municipios en rubros sustanciales como el financiamiento y manejo de los servicios educativos y de salud. Estas disposiciones afectaron de manera negativa la cobertura y calidad de esos servicios, administrados durante muchos años por el Estado nacional (Basualdo, 2002).

En el terreno ideológico, la ofensiva del gobierno menemista se presentó —al igual que en casi todas las experiencias de restauración conservadora del orden social— como la revalorización del individuo y la empresa frente al Estado. La realidad demostró que lo hecho fue concentrar los poderes de decisión en un aparato estatal dominado por el gran capital financiero e industrial exportador; un Estado más pequeño, en términos institucionales, pero fuertemente centralizado en el dictado de las políticas nacionales y ajeno al control efectivo de la sociedad. De esta manera, se enaltece y fortalece la dominación de lo privado sobre lo público, de los intereses individuales frente a las preocupaciones de carácter general, de lo individual ante lo social y del capital sobre el trabajo.

El surgimiento de las organizaciones de trabajadores desocupados constituyó el primer capítulo del proceso de confrontación social que impugnó la política de reordenamiento del capitalismo argentino y cuyo punto culminante fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Como se comentó, el movimiento piquetero hizo su aparición cuando el desempleo masivo golpeó las localidades de Cutral-Co y Plaza Huincul al venderse la empresa petrolera YPF al sector privado en 1992. Las protestas se iniciaron el 20 de junio de 1996 al formularse un llamado a los habitantes de estos

lugares con el fin de realizar una marcha y bloquear la ruta nacional 22. La convocatoria nació de la "Comisión Multisectorial" que se constituyó para protestar por la decisión del gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, de cancelar la licitación de la empresa agroquímica "Fertineu", que representaba una alternativa ocupacional para un sector de los trabajadores desplazados de YPF. La movilización logró el apoyo oportunista de la dirigencia política local, que procuraba golpear al gobernador Sapag, y la solidaridad titubeante de los jefes municipales que se vieron desbordados por la protesta.

La propia dinámica de la movilización hizo que los cortes crecieran más allá de lo que estaba previsto. Entre la ruta principal y caminos secundarios se formaron alrededor de 21 piquetes cuyo punto neurálgico era el corte establecido en Plaza Huinca, donde se dieron cita los representantes de agrupamientos políticos, organizaciones sociales y dirigentes de grupos económicos de la zona. En el resto de los piquetes la composición social era más homogénea, el activo que interrumpió el tránsito estaba formado por obreros desocupados y vecinos de barriadas pobres, por *los fogoneros*, que pasaron la noche —con temperaturas bajo cero— junto a las fogatas, velando por el cumplimiento de impedir el paso de vehículos por los caminos cortados (Favaro, 2004).

Poco antes de que se cumpliera un año de los primeros cortes de ruta y en un contexto político distinto se generaron nuevos bloqueos de ruta y enfrentamientos con la policía. Un ingrediente de carácter cualitativo marcó la diferencia con los hechos de junio de 1996. En abril de 1997 los gremios de empleados públicos y docentes afiliados a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) le dieron al movimiento un marcado perfil opositor al gobierno provincial y a las autoridades nacionales.

En los primeros meses del año 1997 un programa de lucha del sindicato docente de la provincia de Neuquén, que protagonizó varias semanas de huelga, derivó en un corte de la ruta nacional 22. El día 9 de abril un importante grupo de maestros, acompañados por una comisión de padres de familia que eran solidarios con el paro de labores, decidió interrumpir el tránsito en la carretera mencionada. El piquete se convirtió rápido en una trinchera de cuestionamiento a las instancias gubernamentales de mediación e impugnación de las formas partidarias de representación social. De esta manera, sólo resultaban confiables quienes participaban de forma directa en las actividades de bloqueo y movilización. No obstante, la convocatoria atrajo a un sector relativamente reducido de la población, compuesto por integrantes del gremio docente, empleados públicos provinciales y un contingente significativo de jóvenes desempleados o de escasos recursos, los cuales, al igual que en las jornadas de junio de 1996, se encargaron de preparar y permanecer junto a los fogones en los puntos de corte del tránsito. Debe recordarse que la convocatoria al corte se había formulado a partir de una demanda de carácter sindical.

La respuesta de las autoridades fue, en esta ocasión, mucho más dura.

Sin abrir espacios de negociación se ordenó el desalojo de los piquetes, para lo cual un juez federal dispuso el traslado de efectivos de la Gendarmería Nacional y de la policía provincial al lugar de los cortes. El conflicto se desbordó y los pobladores de los barrios más pobres de Cutral-Co decidieron sumarse al movimiento y encarar la represión. El enfrentamiento entre más de 10 mil manifestantes y las fuerzas represivas fue cara a cara en las rutas y calles vecinales. En uno de esos choques muere Teresa Rodríguez, una vecina de un barrio humilde de la localidad, quien a partir de ese momento se transformará en un referente político y simbólico del conjunto del movimiento piquetero.

En días posteriores a la represión el sindicato de docentes de Neuquén aceptó los términos del acuerdo propuesto por el gobernador y puso fin al conflicto. Sin embargo, la carretera siguió bloqueada, y habitantes de barrios marginales y de manera especial grupos de jóvenes con la cara cubierta y armados de palos y piedras se encargaron de sostener la lucha que ya había sido negociada por el gremio docente. Se trataba de jóvenes desempleados, muchos de ellos sin trayectoria laboral, quienes fueron adquiriendo una identidad propia y una valiosa experiencia para negociar —desde posiciones de confrontación— con las instituciones públicas, a partir de las jornadas pasadas junto a los fogones y de los enfrentamientos callejeros con las fuerzas represivas (Svampa y Pereyra, 2003).

Al igual que en la provincia de Neuquén, el norte de Argentina sufrió durante los años noventa las consecuencias del desempleo masivo generado por los cierres o la privatización de empresas públicas, el recorte de personal de los organismos gubernamentales provinciales y municipales, la cancelación de los antiguos ramales ferroviarios y el deterioro de la actividad comercial. En mayo de 1997 los ex-trabajadores de YPF de las localidades de General Mosconi y Tartagal, acompañados de empleados públicos y pequeños comerciantes de la zona, pusieron en marcha un piquete que duró varios días y llevó a una difícil negociación con las autoridades de la provincia de Salta. Los cortes en las carreteras que protagonizaron los obreros desempleados y el apoyo del resto de la comunidad abrieron espacios para que se conformaran nuevas instancias organizativas. El surgimiento y la experiencia de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) en la localidad de General Mosconi merece una reflexión especial. Este agrupamiento nació en abril de 1997 por iniciativa del dirigente piquetero Juan Nieva, y aglutinó a trabajadores que provenían de una doble vertiente laboral: por un lado se encontraban los ex-empleados de YPF, con buenos niveles de calificación y una extensa y consolidada tradición obrera gestada en muchos años de trabajo en relación de dependencia; el otro contingente de la UTD lo formaron personas más jóvenes, con escasa calificación, muchos de ellos en condiciones de precariedad ocupacional y con antecedentes laborales más débiles y mucho menos significativos. Algunos habían sido empleados de micro y pequeños establecimientos privados y, de algún modo, eran benefi-

ciarios indirectos del proceso de expansión de la industria petrolera y de la consolidación de núcleos urbanos en la provincia de Salta. Por el contrario, los ex-trabajadores de YPF eran hijos del periodo más significativo del auge de las inversiones en el sector industrial, de la defensa de los recursos naturales como bienes de propiedad pública y de la expansión del empleo en las actividades extractivas, en particular en las industrias minera y del petróleo.

La UTD fue ganando espacios propios y reconocimiento social a medida que resolvía a su favor la confrontación con las instituciones locales y con organismos políticos provinciales. Esas instancias eran las responsables de gestionar las demandas populares y de instrumentar programas asistenciales de carácter clientelar. El enfrentamiento incluyó también a las estructuras sindicales, en particular, la Unión Obrera de la Construcción, pues la UTD decidió presionar, mediante los cierres piqueteros de caminos y rutas, para que la mayoría de las 150 empresas que funcionan en la zona aceptaran elevar el pago de la hora de trabajo de los peones y albañiles de la industria de la construcción. Los dirigentes de la UTD ampliaron sus convocatorias y atendieron las solicitudes de grupos de la comunidad que no son trabajadores desocupados (Linares, 2003; Barbeta y Lapegna, 2001).

El ejemplo del movimiento piquetero en las provincias de Neuquén y Salta no tardó en extenderse al cordón de los antiguos municipios industriales que rodean la ciudad de Buenos Aires. El proceso de desindustrialización que impulsó el gobierno de Menem golpeó y modificó de manera profunda el tejido productivo de esta zona y trastocó de modo radical la composición de los mercados de trabajo. No fue, en este caso, el cierre súbito de una refinería de petróleo, la cancelación de un ramal ferroviario o la arbitraria cesantía de empleados del Estado provincial, como ocurrió en las economías de enclave del interior de la República, lo que motivó la organización de los grupos sociales afectados por la pérdida de fuentes de empleo. El deterioro de los antiguos distritos industriales del Gran Buenos Aires es el resultado de un proceso que comenzó a manifestarse a fines de los años setentas y se profundizó con la política de reconversión productiva y reforma del Estado del gobierno menemista.

En este contexto de desaparición de alternativas ocupacionales y con una configuración social que se alejaba de los patrones históricos impuestos por la multiplicación de las empresas y la expansión del trabajo asalariado, el movimiento de los desocupados y habitantes de barrios pobres adquirió ciertas particularidades que marcan diferencias significativas en las experiencias de Neuquén y del norte salteño.

La localidad de La Matanza, con alrededor de un millón 500 mil habitantes, es una de las mayores concentraciones de pobreza urbana de toda la República, después de haber sido, como se señaló, uno de los distritos industriales más importantes del cinturón que rodea la ciudad de Buenos Aires. La fuerte implantación que alcanzaron la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se explica, en buena me-

didada, por la presencia de un sustento social que se constituyó a partir de la confluencia de ex-trabajadores de la industria, con una valiosa experiencia como obreros fabriles pero en situación de desempleados de larga data: mujeres de barrios humildes y con escasos antecedentes en el empleo formal, aunque con vivencias significativas en tareas comunitarias; trabajadores precarios en ocupaciones inestables y mal remuneradas, así como desempleados jóvenes con muy pocos o nulos antecedentes en el empleo formal y bajo nivel de calificación. Sobre esta base social, caracterizada por una vinculación muy deteriorada con el universo del trabajo, la FTV y la CCC fincaron su crecimiento con un perfil reivindicativo que las acerca al tipo de intervención social propio de los movimientos populares urbanos. El abanico de reclamos incluye demandas específicamente laborales —apertura de nuevas fuentes de trabajo— que se entremezclan con peticiones del ámbito territorial o local, entendiéndose por esto el barrio o la comuna. Entre otros requerimientos, figuran la legalización de los terrenos ocupados *de facto* por la comunidad y las viviendas que en ellos se construyeron; la instalación de servicios básicos como electricidad, agua potable, drenaje, y la organización autogestiva con el fin de poner en marcha, bajo control vecinal, aquellas instituciones que por tradición funcionaban como parte de las responsabilidades que le competían al Estado: hospitales y clínicas de zona, escuelas primarias, guarderías y comedores populares (Zibechi, 2003; Mansilla Schneider y Conti, 2003).

La confluencia de la FTV y la CCC en la realización de actos públicos, cortes de rutas y puentes, les permitió ampliar su capacidad de convocatoria y asegurar una participación masiva de trabajadores, vecinos de barrios populares y obreros desocupados. Esta mayor capacidad de movilización fue el argumento que dio lugar al reclamo de cierto liderazgo en el Gran Buenos Aires —área metropolitana de la capital de la República— con respecto a las otras agrupaciones piqueteras. De algún modo este mayor protagonismo se vio reflejado, al menos hasta mediados del año 2002, en que ambas organizaciones lograron ser las receptoras del número más alto de planes sociales asignados por el gobierno. Es difícil encontrar en el resto de las corrientes piqueteras esta doble representación que combina elementos laborales, territoriales —con marcada presencia en ciertas localidades y municipios— y una importante capacidad de movilización en el ámbito nacional. Las dos organizaciones han demostrado también una mejor disposición al diálogo con las autoridades. Después de la caída del presidente De la Rúa, la FTV y la CCC aceptaron formar parte de los Consejos Consultivos que estableció el gobierno provisional de Eduardo Duhalde. Estos organismos tenían el propósito de promover una administración multi-sectorial del subsidio que se otorga a través del Plan "Jefas y Jefes de Hogar", programa que sustituyó a los planes "Trabajar" heredados del régimen menemista. En concordancia con este proceso de negociaciones las dos corrientes optaron por moderar los piquetes y actos de protesta, con lo cual su relación con las autoridades nacio-

nales —con Duhalde primero, y el presidente Kirchner después— se hizo menos beligerante (Kohan, 2002).

En otros municipios y localidades del llamado Gran Buenos Aires surgieron diversos agrupamientos piqueteros. La profundización de la crisis durante 2001 y 2002 hizo que se extendiera la influencia de las organizaciones de trabajadores desocupados y que nuevos nombres y siglas se sumaran a las ya existentes. Se debe puntualizar que al hacer referencia al movimiento piquetero no se piensa en un actor único ni en una expresión colectiva homogénea. No obstante, sobre un espacio social relativamente heterogéneo es posible descubrir algunas notas comunes, entre otras, la adopción de la *democracia directa* y el *principio de la horizontalidad* como prácticas de ejercicio autogestivo frente a las formas convencionales de la democracia representativa. Pese a que son numerosos los aspectos políticos y organizativos que diferencian a las distintas agrupaciones piqueteras es factible —sacrificando matices y perfiles propios— reunir las en cuatro grandes corrientes:

- **Federación Tierra y Vivienda (FTV):** es la expresión territorial de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y su máximo representante es el dirigente Luis D'Elía. La FTV tiene presencia nacional pero las principales bases sociales de apoyo y los lugares de mayor arraigo se encuentran en los antiguos distritos industriales que forman el cordón del Gran Buenos Aires, como el municipio de La Matanza.

- **Corriente Clasista y Combativa (CCC):** es una agrupación que procura nuclear a los trabajadores desocupados y a los sectores sindicales combativos y democráticos. Tiene sus principales bases en las localidades del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias como Jujuy, en las que se despidió a los empleados públicos y se privatizó la prestación de ciertos servicios como el suministro de agua potable, la electricidad y recolección de residuos. Los principales dirigentes son Juan Carlos Alderete, en la zona del Gran Buenos Aires, y Carlos Santillán —ex-empleado público provincial—, en la región noroeste de la República.

- **Bloque Piquetero Nacional:** surgió a finales del año 2001, al calor de las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre, como resultado de la confluencia de diversas agrupaciones de desocupados, entre otras el Polo Obrero —principal promotor—, el Movimiento "Teresa Rodríguez", Movimiento Territorial de Liberación, Frente de Trabajadores Combativos y la Coordinadora de Unidad Barrial. Sus puntos de apoyo más consolidados se encuentran en las localidades del Gran Buenos Aires, ubicadas al sur de la capital y en algunos barrios industriales de esta ciudad. El Bloque mantiene una posición de marcada beligerancia con las autoridades, incluido el repudio y la confrontación con el gobierno del presidente Kirchner, pese a la actitud dialoguista que éste ha manifestado desde que asumió el cargo en mayo de 2003.

- **Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón:** su nombre recuerda al militante piquetero asesinado en la provincia de Salta en el año

2000. Al igual que el Bloque, se trata de una alianza de diversas agrupaciones piqueteras que confluyen bajo una misma sigla. Detrás del rótulo "CTD" se coordinan organizaciones de desocupados de varios municipios, suelen coincidir en algunos puntos reivindicativos básicos como la ampliación de la ayuda monetaria para los desempleados, la generación de puestos de trabajo y la distribución de alimentos en los barrios marginales.

El marcado protagonismo del movimiento piquetero en las luchas populares de los últimos años ha motivado diversas interpretaciones. Desde la academia y desde el mundo de la política se ha tratado de conceptualizar un fenómeno que desborda los referentes políticos y cuestiona a la mayoría de los presupuestos teóricos. Para algunos autores se trata de la "lumpenización" de un segmento de la clase obrera que vive de los subsidios públicos; para otros analistas se está en presencia de la aparición de una nueva subjetividad en sectores sociales excluidos por el proceso de reestructuración capitalista (Ferrara, 2003), o bien son los síntomas que anuncian la gestación de una nueva clase trabajadora que no acepta ninguna condición social preexistente. Por nuestro lado, entendemos que el movimiento de insurgencia de los desocupados y las asambleas barriales *no constituye el repliegue o reorganización de los desplazados sobre ideologías tradicionales*, en las cuales suelen buscar refugio, identidad y solidaridad algunas comunidades indígenas y campesinas del continente. Por lo tanto, es oportuno enfatizar que las organizaciones piqueteras no representan esa especie de "resurgimiento conservador desde abajo", que suele registrarse en los procesos de disolución de algunos Estados nacionales (la ex URSS o la antigua Yugoslavia, entre otros). Se trata, por el contenido de su mensaje, de una propuesta progresista que busca superar la triple crisis que afecta a los nuevos movimientos sociales. Esta crisis golpea en tres frentes principales: a) la urgencia de superar las limitaciones de sus programas, propuestas, ideas e imaginarios que corren el riesgo de volverse obsoletos ante la ofensiva generalizada del capital y de los grupos dominantes; b) la necesidad de replantear sus formas organizativas, debilitadas o desarticuladas por la reestructuración económica y la crisis que afecta al mundo del trabajo, y c) ofrecer alternativas a las dudas y al desconcierto que viven sus ideólogos y dirigentes, aferrados, en muchos casos, a viejos paradigmas y referentes políticos desactualizados. Es posible que el futuro del movimiento piquetero dependa de la resolución exitosa de estas tres dimensiones de la crisis.

Bibliografía

- ALMEYRA, Guillermo (2004). *La protesta social en la Argentina (1990-2004)*. Buenos Aires, Peña Lillo/Ediciones Continente.
- BARBETTA, Pablo y Karina BIDASECA (2004). "Reflexiones sobre el 19 y 20 de

- diciembre de 2001. ¿Emergencia discursiva o nueva subjetividad?, en *Revista Argentina de Sociología*, Buenos Aires. Miño y Dávila Editores, año 2, núm. 2.
- _____ y Pablo LAPEGNA (2001). "Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el norte salteño", en Norma GIARRACCA *et al.*, *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, Alianza Editorial.
- BASUALDO, Eduardo (2002). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes/FLACSO/IDEA.
- BONASSO, Miguel (2002). *El palacio y la calle*, Buenos Aires, Editorial Planeta.
- FAVARO, Orietta (2004). "Protesta social y representación en las provincias argentinas: Neuquén en la última década", en José SEOANE, *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*, Buenos Aires. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- FERNÁNDEZ MORES, Lucio (2003). "La caída del 'voto bronca' les pegó duro a los piqueteros", en *Clarín*, Buenos Aires, 29 de abril.
- FERRARA, Francisco (2003). *Más allá del corte de rutas*, Buenos Aires. La Rosa Blindada.
- GODIO, Julio (2002). *Argentina: en la crisis está la solución*, Buenos Aires. Editorial Biblos.
- KOHAN, Aníbal (2002). *¡A las calles!*, Buenos Aires. Ediciones Colihue.
- LINARES, Martín (2003). "Trabajar sin amos. De la utopía al acto", en *Excelsior*, México, 22, 23, 24 y 25 de octubre.
- MANSILLA SCHNEIDER, Iván y Rodrigo A. CONTI (2003). *Piqueteros, una mirada histórica*, Buenos Aires. Astralib Editora.
- PIQUÉ, Martín (2005). "Los piqueteros electos", en *Página 12*, Buenos Aires, 30 de octubre.
- SVAMPA, Maristella y Sebastián PEREYRA (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires. Editorial Biblos.
- ZIBECHI, Raúl (2003). *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*, La Plata, Letra Libre.